

# Castilla y León

PALENCIA C/. Cardenal Almaraz, 4. Teléfs. (979) 750571-72  
 ZAMORA San Pablo, 2. Teléf. (980) 530124 y 530145. Fax: 530626  
 SEGOVIA Plaza Mayor, 13, 2º. Telfs. (921) 444601-651. 443033. Fax: 444600  
 SALAMANCA C/. Juan de la Cierva, 7, 4º B. Teléf. (923) 236196  
 AVILA Calle Conde Don Ramón, 20. Teléf. (920) 212148  
 SORIA C/. Las Casas, 14, 3º B. Teléf. (975) 226123  
 BURGOS C/. Madrid, 23, 1º izquierda. Teléf. (947) 263871  
 LEON Ausente, 2, 3º D. Teléf. (987) 241481  
 MEDINA DEL CAMPO Ronda de las Flores, 4. Teléf. (983) 803401. Fax: (983) 811065.



LA 'TRAMA' DE LA DIPUTACION DE ZAMORA

## El PP extiende la querrela a posibles cómplices de la «difamación» a Aznar

La acción judicial contra Corrales se acompaña de 500 folios de documentación

El PP presentó ayer en el Decanato de Zamora la querrela por injurias y calumnias contra el empresario Eduardo Corrales Cavarrot «y cuantas personas

resulten en el curso de la investigación coautores cómplices o encubridores de los hechos». En el texto de la querrela se expone que las declaraciones del

empresario atacan «el prestigio del presidente nacional del partido, así como la opinión favorable que sobre sus méritos y virtudes tiene la sociedad».

La Diputación zamorana debate hoy la comisión de investigación

A. G. ZAMORA

Asun García. ZAMORA

El representante legal del PP, el procurador Miguel Angel Lozano, llegó ayer pasadas las 13 horas a los juzgados de Zamora cargado con los alrededor de 500 folios de documentación que se adjuntan a la querrela contra el empresario Eduardo Corrales Cavarrot por un posible delito de injurias y calumnias «y otro tipo de delitos que puedan inferirse». La acción judicial fue presentada en el Decanato para su posterior tramitación, que ha correspondido al Juzgado de Instrucción número 1, junto con la documentación complementaria: la mayoría recortes de prensa local, regional, nacional e internacional, en los que se han publicado las declaraciones del presidente de la Diputación zamorana, Antolín Martín, quien se refirió al «tra-siego de maletines por los pasillos de la diputación» y del pago de comisiones por adjudicaciones de obras, así como las de Eduardo Corrales, quien en su declaración ante Fiscalía involucra al presidente del Gobierno, José María Aznar en el cobro de cheques para la financiación del partido.

La querrela, interpuesta por Angel Acebes, coordinador nacional del PP, en representación del partido, ha sido tramitada en Zamora por ser el lugar donde se produjeron los hechos supuestamente delictivos, después de que se otorgaran poderes a la dirección provincial para formalizar la acción judicial.

### Alarma social

En el texto consta como querrelado el empresario «y cuantas personas resulten coautores cómplices o encubridores en el curso de la investigación». En la querrela se hace alusión expresa a las declaraciones del presidente de la Corporación provincial, calificadas de graves, y se argumenta que «ni que decir tiene que las expresiones proferidas por Antolín Martín, dada su condición de presidente de la Diputación, provocaron una enorme alarma social, tanto a nivel local, como regional, nacional e internacional». Igualmente, se recogen las declaraciones de Corrales Cavarrot, grabadas en una cinta magnetofónica, y se expone que «al enjuiciar el contenido e intención de las gravísimas acusaciones, se advierte que sus expresiones resultan ser objetivamente ofensivas y revelan un evidente ánimo de descrédito



Miguel Angel Lozano explica los trámites, una vez presentada la querrela en el Decanato. FOTO CALLEJA

hacia el Partido Popular, tanto hacia su presidente nacional, como hacia los más destacados dirigentes locales del partido».

El contenido de la actuación judicial incide en el hecho de que se involucre a Aznar en la supuesta financiación ilegal del PP y en la intencionalidad de dañar su imagen: «El querrellado ha puesto especial énfasis en implicar al presidente nacional del

PP en el posible cobro de comisiones ilegales, atribuyéndole actuaciones políticas, claudicaciones, transgresiones y condescendencias acomodaticias a los intereses económicos del PP, que, de ser ciertas, supondrían la comisión de delitos específicos (...) Es el prestigio del presidente nacional del PP el atacado, así como la opinión favorable que sobre sus méritos y virtudes tiene

la sociedad».

Paralelamente, ayer prestó declaración en Fiscalía el constructor Maximino San Gregorio, uno de los nombres facilitados al fiscal, que podría aportar datos a la investigación abierta sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales. San Gregorio señaló tras su comparecencia que había aportado información, aunque, «ninguna cosa ex-

La comisión de investigación sobre la supuesta trama de corrupción quedará constituida previsiblemente en la sesión de pleno que la Diputación de Zamora celebra hoy. Las cuatro fuerzas políticas que existen en este momento en la Corporación (Antolín Martín y los seis diputados afines, PP, PSOE e IU) son favorables a la creación de la comisión, de forma que el debate se centrará en el número de miembros que deben integrarla y en la representatividad de cada grupo.

Todo parece indicar que prevalecerá la propuesta de que sean nueve los integrantes del equipo de investigación y que se aceptará la distribución de tres miembros del PP y otros tres del PSOE; dos, del grupo de Martín, y uno, de Izquierda Unida. De esta fórmula es partidario el grupo socialista, cuyos nueve votos, junto con los del grupo del presidente, prevalecerían sobre otras propuestas.

Al pleno se presentan, además, expedientes de expropiación de suelo para la ejecución de diversos tramos de carretera, así como una propuesta del área de Agricultura para la firma de un convenio entre la consejería de Agricultura y la Diputación para la mejora genética del ganado vacuno. En la sesión se dará cuenta también de las resoluciones de Presidencia sobre el cese de los miembros de la Comisión de Gobierno y delegados de áreas y de los nuevos nombramientos, derivados de la escisión del grupo popular.

## Los constructores exigen la dimisión de Antolín Martín o que demuestre sus apoyos para gobernar

A. G. ZAMORA

El recién elegido presidente de la CEOE-Cepyme de Zamora, Angel Herrero, reclamó ayer, en nombre la patronal «la inmediata dimisión de don José Antolín Martín o el sometimiento a una moción de confianza que garantice a la sociedad zamorana los apoyos con los que actualmente cuenta».

Visiblemente indignado, el representante de la organización empresarial expuso los graves perjuicios que la situación (la crisis en la institución y las denuncias sobre la supuesta trama de corrupción) ha ocasionado a la economía de la provincia, puesto que se han retrasado e, incluso, se han desviado a provincias limítrofes importantes inversiones públicas y privadas, y como ejemplo apuntó la de una empresa privada que tiene paralizada una inversión de 1.000 millones.

Herrero Magarzo arremetió contra el presidente de la Diputación a quien responsa-

biliza de tener paralizada la institución, «donde no se pagan certificaciones de obras desde el pasado mes de diciembre». Afirmó que no se puede gobernar la institución con sólo seis diputados, y puso de manifiesto que la Diputación está totalmente sola y aislada: «no tiene relaciones institucionales con ninguna otra administración pública». Para los empresarios, la Corporación provincial «más parece un 'bunker' de un solo señor que una institución intrínsecamente ligada al desarrollo de la provincia». Insistió en que la actitud de Martín con sus denuncias sobre corrupción «es una cortina de humo para tapar el problema del presidente con su antiguo partido», y subrayó que «Zamora y su provincia no tienen por qué pagar los desperfectos ocasionados como consecuencia del personalismo político». La patronal rechaza los pronunciamientos de Martín sobre «vocación de servicio y honradez» y exigen que la Diputación funcione; para ello, «estamos dispuestos a ir a la plaza de Viriato a

manifestarnos». Asimismo, esperan que se les envíe la relación de las adjudicaciones de obras realizadas desde 1982 a 1996, tal como han solicitado, para esclarecer las acusaciones realizadas.

Los empresarios apelan a la responsabilidad política de los otros partidos con representación en la Diputación (PSOE, PP e IU) para que se decanten sobre la gobernabilidad en la institución. Además invitan a los agentes sociales -sindicatos, organizaciones agrarias, asociaciones culturales y ONGs- para que adopten medidas semejantes a la de CEOE, «puesto que se está jugando con el futuro de Zamora».

La patronal ha querido dejar claro, además, que Eduardo Corrales Cavarrot no es empresario zamorano; «Eduardo Corrales puede ser cualquier cosa menos empresario y constructor zamorano». (Corrales, quien ha denunciado el cobro de comisiones ilegales, es de origen burgalés y ha ejercido como empresario en el País Vasco y en Zamora).